



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Acta firma conjunta

Número:

Referencia: Acta de cierre Audiencia Pública de Transporte convocada para el día 30 de noviembre de 2022.

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

LEY N° 24.065

AUDIENCIA PÚBLICA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 9:00 horas, se labra la presente acta a los efectos de dejar constancia del desarrollo de la Audiencia Pública convocada por la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 539 de fecha 20 de octubre de 2022, la que se efectuará de manera virtual.

A continuación, toma la palabra el Presidente de la Audiencia, Walter Domingo MARTELLO, quien expresa:

“Buenos días a todos y a todas, mi nombre es Walter Domingo Martello, soy el Interventor del ENRE, a mi lado se encuentra el Ingeniero Diego BIBÉ y estamos aquí a efectos de presidir esta Audiencia Pública, por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), conforme fuera dispuesto por la Resolución ENRE N° 539 de fecha 20 de octubre de 2022.

En primer lugar, quiero saludar a las y los funcionarios presentes; legisladores/as nacionales y provinciales; representantes de las empresas concesionarias; representantes de las asociaciones de usuarios, sindicatos y público en general.

También quiero saludar y agradecer a todo el personal del ENRE que con su trabajo y dedicación hacen posible esta audiencia pública, fueron muchas horas de trabajo para preparar todo en un corto tiempo y aún quedan por delante muchísimo trabajo más por hacer, a todos ellos quiero manifestar mi reconocimiento.

Seremos asistidos legalmente por el Dr. Sergio BERGOGLIO y el Dr. Gabriel DI PASCUAL; y en la Secretaría de la audiencia se desempeñará la Dra. Silvia AGINSKY y la Dra. Camila BEUX. Esta Audiencia se va a regir

por el Reglamento de Audiencias Públicas aprobado por el Decreto N° 1172 de fecha 3 de diciembre de 2003 que fue adoptado por el organismo mediante la Resolución ENRE N° 30 de fecha 15 de enero de 2004.

Se pone en conocimiento de los participantes que funcionarios del ENRE están presentes para colaborar y facilitar el acceso de quienes se inscribieron a tal efecto, que el desarrollo de la misma será registrado de manera taquigráfica, videograbada, y también podrá seguirse en vivo por la plataforma digital YouTube.

Quiero aclarar que, por primera vez, la transmisión de la audiencia será subtitulada a fin de posibilidad una mayor accesibilidad al público en general sin perjuicio de los mecanismos legales mencionados precedentemente.

Conforme lo normado por el Reglamento de Audiencias Públicas, a partir del 11 de noviembre de 2022 y hasta las VEINTITRÉS HORAS Y CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS (23:59 hs.) del día 28 de noviembre de 2022, se habilitó el Registro de Participantes en la página web <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifas/audiencia-publica-transporte-2022>, donde se registraron a fin de su participación en esta Audiencia VEINTIOCHO (28) inscriptos, conforme da cuenta el Acta de cierre de Inscripciones labrada al momento del cierre que consta digitalizada como IF-2022-128412430-APN-SD#ENRE en el Expediente N° EX-2022-120090876-APN-SD#ENRE.

Considerando las facultades del Decreto PEN N° 1.172/2003 que confiere a la Presidencia de la Audiencia Pública y dando inicio formal a los recaudos de la misma se aprueba el correspondiente Orden del Día invitándose a considerar los puntos que lo integran.

Se deja constancia que con fecha 29 de noviembre de 2022, el mencionado Orden del Día ha sido debidamente publicado en la página web del ENRE, para conocimiento de los participantes, autoridades, público en general y medios de comunicación.

Con referencia a los hechos y el derecho a considerar, se exponen sucintamente los motivos y los objetivos de la convocatoria.

Es dable señalar que la Ley N° 27.541, que es la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL (PEN) a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) o realizar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de la Ley N° 24.065.

En este sentido, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 1.020 de fecha 16 de diciembre de 2020 determinó el inicio de la renegociación de la RTI vigente, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal. En este momento, estamos discutiendo los temas que tienen que ver con el transporte de energía eléctrica.

Asimismo, se encomendó a este Ente Nacional a realizar el proceso de renegociación de las revisiones tarifarias, considerándose necesaria la reestructuración tarifaria determinada en la Ley N° 27.541 y además le otorgó diversas facultades a este Ente Regulador para llevar a cabo este procedimiento.

Es por ello, que este Ente dictó la Resolución ENRE N° 17 de fecha 19 de enero de 2021, dando inicio al proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral para lograr un Régimen Tarifario de Transición (RTT), hasta lograr el Acuerdo Definitivo de Renegociación y es, en este sentido, que se convocó a esta Audiencia para que participen las siguientes compañías bajo jurisdicción del ENRE:

1. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER

- SOCIEDAD ANÓNIMA (**TRANSENER S.A.**),
2. EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (**TRANSBA S.A.**),
 3. EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA (**TRANSPA S.A.**),
 4. EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL COMAHUE SOCIEDAD ANÓNIMA (**TRANSCO S.A.**),
 5. EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (**TRANSNEA S.A.**),
 6. EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (**TRANSNOA S.A.**),
 7. EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (**DISTROCUYO S.A.**)
 8. y al ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (**EPEN**)

El artículo 8 del citado decreto, determinó la aplicación de mecanismos que posibiliten la participación ciudadana, contemplando las previsiones del Reglamento General de Audiencias Públicas para el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobado por el Decreto N° 1.172/2003 o bien el régimen propio de participación que el Ente disponga conforme a su normativa.

Y el artículo 2 de la Resolución ENRE N° 17/2021 también estableció las diversas formas de participación ciudadana que el Ente puede disponer a los efectos de garantizar la publicidad de los actos del Estado y el debido cumplimiento del derecho al acceso a la información.

Finalmente, por la Resolución ENRE N° 539/2022 se convocó a esta Audiencia Pública para poner en conocimiento de la ciudadanía y escuchar las opiniones respecto de la cuestión que nos convoca.

A fin de continuar con el proceso de la adecuación transitoria de tarifas del servicio público de transporte de energía eléctrica, el ENRE convocó a las empresas concesionarias de transporte a que elevaran sus respectivas propuestas para obtener una adecuación transitoria de las tarifas, ello dentro del marco general dado por el Decreto 1020/2020 el cual establece un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral con carácter previo a definir las tarifas a aplicar por las concesionarias.

Creo necesario mencionar brevemente una caracterización general sobre el instituto de la Audiencia Pública. Se trata de una instancia formal de participación ciudadana que constituye una valiosa herramienta que emplean los Estados modernos para formar su voluntad, es decir, de manera previa a tomar una decisión que afecta a la población escuchar a las voces de todos los actores sociales involucrados en la misma a los efectos de explicitar, reconocer y evaluar los intereses contrapuestos y los respectivos argumentos de las partes, y a su vez transparentar la gestión administrativa de los actos de gobierno.

El mecanismo de la Audiencia Pública se encuentra contemplado expresamente en el texto de la Ley N° 24.065 de energía eléctrica en sus artículos 11, 13, 32, 46, 48, 73, y 74, alcanzando las cuestiones vinculadas a la autorización de construcción y ampliación de instalaciones, fusión de empresas, infracciones a la Ley N° 24.065, por actos violatorios a la libre competencia y/o de abuso del monopolio natural y, finalmente, por cuestiones atinentes al régimen tarifario, como es el caso que nos convoca.

Es precisamente en éste último sentido cuando la Audiencia Pública cumple la función de etapa de defensa de los administrados contra un posible ejercicio abusivo de la función administrativa. Y esto se enlaza y articula, a su vez, con el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, la garantía al derecho a la protección de los usuarios y consumidores, asegurando el derecho al acceso a la información de manera oportuna, completa, adecuada y veraz. A su vez, para la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Asimismo, otorga una garantía de razonabilidad para el usuario y disminuye las estadísticas de litigación judicial sobre las medidas que se adoptan.

En este sentido, quiero poner en relieve que, sin perjuicio de reconocer que la norma vigente establece el carácter no vinculante de la Audiencia Pública, nuestra intención es que la misma no se vea reducida a un “trámite formal”, es decir, realizar esta Audiencia Pública solo para cumplimentar un requisito reglamentario a los efectos de la plena legalidad del procedimiento. No. Nuestro propósito es que lo que hoy se discute en esta Audiencia Pública sea verdaderamente un insumo a tener en cuenta en la decisión final con respecto a la tarifa a aplicar. Esta Audiencia Pública no será un formalismo y considero muy valioso los aportes y las opiniones que realicen cada uno de los participantes. De esa forma toma verdadero sentido este instrumento de la democracia participativa cuyo objetivo es la intervención ciudadana en el proceso de toma de decisiones del Estado, participando con su voz en la elaboración de disposiciones de alcance general a cargo de la Administración cuando las mismas puedan proyectar efectos sobre los derechos e intereses de los usuarios. No se trata de un “mero trámite” a cumplimentar, sino de una verdadera fuente de información y de debate democrático en donde escucharemos con atención a todas las partes interesadas (empresas concesionarias, asociaciones de usuarios, legisladores, sindicatos) cuyas contribuciones, planteos y puntos de vista van a enriquecer el proceso decisorio del regulador.

En rigor, esta audiencia pública que celebramos tiene raigambre constitucional y constituye una parte esencial del procedimiento administrativo previo y necesario respecto a los derechos en juego.

Debemos destacar que hemos procedido a brindar para el debate de toda la información necesaria que permita la discusión libre y fundada de las modificaciones propuestas. Esta información fue publicada de forma completa en la página web del ENRE el 11 de noviembre para conocimiento de todos los interesados.

La sociedad moderna del siglo XXI es una sociedad cuya tecnología se basa en la energía eléctrica. La usamos en nuestras viviendas (para iluminarnos, para combatir el calor o el frío, para refrigerar y cocinar alimentos, para calentar el agua de la ducha e incluso para obtener el agua que usamos para higienizarnos, cocinar y consumir) en la industria (para producir infinidad de bienes y servicios) en el transporte público (en los subtes), y para hacer funcionar las tecnologías de la información y comunicación de la que dependemos para comunicarnos, informarnos y entretenernos, y en un horizonte cercano no mayor a 20 años, será la principal fuente de energía de los automóviles (de hecho Europa estableció el año 2035 como plazo final para la producción de automóviles con motores de combustión interna). En síntesis, vivimos en una sociedad basada en la electricidad. Dependemos tanto de esta energía que su demanda es inelástica, no podemos sustituirla por otra energía. No al menos si pretendemos conservar los estándares de confort propios de las sociedades modernas.

Atentos a que la base de que los servicios públicos vinculados al disfrute de los derechos humanos es parte de las funciones de los Estados, la Corte Interamericana ha indicado que en los contextos en los que estos son prestados por agentes privados, los Estados mantienen la titularidad de proteger el bien público respectivo para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, y así lo ha expresado la Corte I.D.H. en el Caso Ximenes Lopes, sentencia del 4 de julio de 2006.

Por otro lado, las empresas transportistas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos reconocidos en los pactos, tratados y declaraciones internacionales. La responsabilidad empresarial, como señala Naciones Unidas, de respetar los derechos humanos en sus operaciones y prácticas corporativas, mediante el ejercicio de la debida diligencia para evitar impactos negativos sobre los derechos de los usuarios.

Nuestra intención por otro lado, y a tenor de lo antedicho, es de la de promover un compromiso público y de buena fe de las empresas de forma que trascienda la visión de responsabilidad social empresarial tradicional hacia parámetros vinculantes dirigidos al efectivo respeto de los derechos humanos.

Como sabemos, el transporte dentro del mercado eléctrico tiene por principal función vincular la oferta de generación de energía eléctrica con su demanda por parte de los usuarios residenciales, usuarios generales y grandes usuarios (industria). La expansión de nuevos tramos del sistema de transporte de energía eléctrica está a cargo de los usuarios y del Estado. Y los costos que demande la expansión no se incluyen en la tarifa de transporte. Dentro de la tarifa de transporte encontraremos los recursos que el sector utiliza para la operación y mantenimiento, salarios del personal, inversiones (en el sentido de solventar la reposición de elementos técnicos, insumos rotables, e incorporación de tecnología) y la renta empresarial.

Para que la red funcione debe recibir el debido mantenimiento en tiempo y forma. Pero además debe funcionar cumpliendo determinados estándares de calidad de servicio. Ambos casos, mantenimiento y calidad, son exclusiva responsabilidad de las empresas concesionarias y así está establecido en los contratos de concesión a los que adhirieron voluntariamente. Dado que el sistema de transporte es el que define el “techo de la calidad” del suministro eléctrico, ya que las distribuidoras no pueden mejorar el suministro que reciben de “aguas arriba” sino que su tarea se limita a sostenerlo y distribuirlo a los usuarios. Es por ello que la etapa del transporte de energía resulta clave en todo el sistema.

La Ley 24.065, régimen de la energía eléctrica, define en su artículo 1° al transporte de energía eléctrica como un servicio público. Por lo cual dicho servicio debe cumplir con las exigencias de seguridad, calidad y confiabilidad propios de todo servicio público y que son producto del fiel cumplimiento de los requerimientos técnicos y operativos y de las normas regulatorias establecidas por el ENRE.

Es deber del regulador propender a mantener la calidad del servicio eléctrico de modo que éste preste en las condiciones que la comunidad de usuarios requiere. El servicio de transporte en Extra Alta y Alta Tensión es indispensable para el desarrollo armónico de la Nación, de las economías regionales y de las comunidades que la conforman.

Es por ello que, ante la situación económica que presiona sobre los costos de la prestación del servicio, la presente audiencia tiene por objeto el debate sobre los impactos que el contexto tiene sobre la situación prestacional.

Pero, no por ello escapa a este Regulador, la falta de proactividad que el subsector tiene en relación a las necesidades de las demandas provinciales y el crecimiento sistémico. Las concesionarias se centran en sus necesidades sin articular con las provincias respecto de las necesidades de las demandas provinciales, produciéndose así una “doble mirada” sobre un servicio público indispensable. La mirada centralizada de quien resguarda sus instalaciones y necesidades operativo-comerciales, desplazando las necesidades de la demanda, que son, su razón de existencia y, en última instancia su fuente de ingresos.

Estamos enfrentando picos de demandas complejos y aleatorios debido a las condiciones climáticas, lo que exige del transporte de energía la máxima disponibilidad y flexibilidad. Mientras, las concesionarias son renuentes a

cumplir acabadamente con las condiciones de calidad de servicio. Resulta inadmisibile que, tras más de 25 años de concesión, aun no hayan desarrollado las sinergias con demandantes, agentes distribuidores y provincias y resulten un eje propositivo para sortear la enorme presión que existe sobre los sistemas.

Hemos sido y seremos implacables con el control de calidad y las sanciones, porque los concesionarios no deben ni pueden usar las instalaciones a cargo y su gestión como elemento de presión para mantener sus ingresos, afectando calidad de servicio de los usuarios.

Hoy se cumplen 91 días de mi asunción en ésta intervención y desde el primer día que vengo recibiendo por parte de las empresas de transporte y distribución reiterados e insistentes pedidos de una actualización tarifaria. Incluso con peticiones extravagantes de proceder a una recomposición tarifaria sin Audiencia Pública, propuesta que rechazamos de plano por antijurídica e ilegítima. También, cabe mencionar, durante buena parte de este tiempo el sector estuvo en estado de “alerta y movilización” por parte del gremio con motivo de la demanda de una recomposición salarial, la cual en la mayor parte del sector fue resuelta favorablemente a principios del mes de noviembre. Recomposición salarial, seguramente justa y necesaria, que fue usada permanentemente por el sector para requerir incrementos de la tarifa.

Mi posición sobre el valor de las tarifas de los servicios públicos es conocida. Siempre ha sido la misma y la he sostenido públicamente desde hace muchos años. No pueden pretenderse tarifas del primer mundo con servicios cuya calidad es del tercer mundo. Seguidamente, los concesionarios podrán contra argumentar que tampoco se puede tener la calidad del primer mundo con tarifas del tercer mundo. Es verdad, pero también podríamos discutir que a lo largo de la historia de las privatizaciones del sector eléctrico tuvimos varias veces tarifas próximas a las del primer mundo, pero que, sin embargo, la calidad no mejoró sustancialmente.

La siguiente fase del debate se manifiesta cuando los concesionarios argumenten –lo hicieron reiteradas veces en las audiencias públicas pasadas y seguramente lo reiterarán en ésta– que el propio texto de la Ley 24.065 establece en su artículo 41 que los servicios “...deberán posibilitar una razonable tasa de rentabilidad...” A lo que responderemos que también el artículo 40 de la citada Ley menciona que “...los servicios serán ofrecidos a tarifas justas y razonables.” Y que también el artículo 41 menciona que la tasa de rentabilidad razonable “...deberá guardar relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de la empresa.”

Recordemos que el mayor apagón de la historia nacional se produjo un 16 de junio de 2019 (el “apagón del Día del Padre”) durante un período de total recomposición tarifaria luego de la RTI de 2017, en donde las transportistas prácticamente triplicaron sus ingresos mediante un procedimiento que fue oportunamente muy criticado. Este hecho objetivo, un colapso masivo que afectó a todo el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y dejó sin servicio a 48 millones de personas durante más de 14 horas, llegando a afectar incluso regiones del sur de Brasil y Uruguay, cuestiona entonces el argumento que establece que la baja calidad del servicio es producto directo del retraso tarifario. Porque cuando tuvieron la tarifa que pedían, no pudieron impedir dejar sin luz durante 14 interminables horas a todo el país. Hecho que como todos conocen motivó las respectivas sanciones del ENRE.

En fin, para intentar salir del círculo vicioso de “quien tiene la culpa” y encontrar una síntesis que nos permitan resolver esta discusión creemos que la respuesta se encuentra en encontrar una tarifa que sea factible para el usuario y que se relacione directamente con el actual contexto socioeconómico que vivimos. No se puede pretender “recomponer la rentabilidad” en una República Argentina que atraviesa un momento muy difícil con índices socioeconómicos durísimos que nos duelen a todos.

La tarifa final surgirá en definitiva de los estudios que realizarán los equipos técnicos del ENRE y en función a la evaluación de los datos y de los argumentos que surjan en esta Audiencia Pública. Los concesionarios deberán entender y aceptar que en el actual contexto económico social la tarifa a la que accedan será la posible, y no la deseada. Esto desde ya deben saberlo y asumirlo.

Si bien la incidencia de la tarifa de transporte es el menor de los cuatro componentes de la tarifa (generación, transporte, distribución e impuestos), y que su impacto económico es del orden al 2% del total de la factura eléctrica, de todas maneras quiero hacer explícito el compromiso público de ésta intervención que vamos a defender cada peso que deban pagar los usuarios, buscando morigerar al máximo el impacto económico en los hogares de ésta adecuación tarifaria.

Tenemos que evitar reduccionismos tales como considerar a la energía eléctrica sólo como un producto del mercado, para reconocerlo como un servicio básico ligado a una vivienda digna, y su accesibilidad como un derecho humano. La energía eléctrica es una necesidad básica insustituible y forma parte de los derechos humanos de tipo económico y social.

Finalizando, la actual situación económica que afecta a nuestro país nos obliga a actuar con mucha cautela y prudencia al momento de fijar nuevos valores de los servicios para poder asegurar a los usuarios un alto grado de certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad en las tarifas. Se trata de cumplir con los principios rectores que estableció en el año 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de razonabilidad de la política tarifaria a implementar en el caso de servicios públicos. Estos principios son y serán el norte que guía el accionar de ésta intervención”

A continuación, se da tratamiento al Orden del día:

- 1.- Máximo Adrián FORNS, DNI 22.336.207 en representación de TRANSNOA SA;
- 2.- Gustavo Adolfo PAREDES, DNI 12.104.497 en representación de TRANSNEA SA;
- 3.-Pablo Fernando TARCA, DNI 21.475.113 en representación de TRANSENER SA;
- 4.-Pablo Fernando TARCA, DNI 21.475.112 en representación de TRANSBA SA. Se deja constancia que, el orador, por un error al tiempo de consignar el documento al tiempo de la inscripción consignó como número 21.475.112 cuando corresponde 21.475.113;
- 5.- Fernando Javier AENLLE GUERRA, DNI 16.938.177 en representación de TRANSPA SA;
- 6.- Martín Eduardo FERRER, DNI 34.352.740 en representación de TRANSCOMAHUE SA;
- 7.- Gustavo DONDERO, DNI 13.764.153 en representación de DISTROCUYO SA;
- 8.- Mario Alejandro BOBBERA, DNI 24.813.495 en representación de EPEN;
- 9.- Gastón Arnoldo ARIAS, DNI 18.038.295 Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires;
- 10.- Mariana GROSSO, DNI 23.091.506 Defensora del Pueblo de la Nación;
- 11.- Adriana SANTAGATI, DNI 16.070.078 Defensora del Pueblo de la Provincia de Río Negro;

- 12.- José Leonardo GIALLUCA, DNI 17.379.704 Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa;
- 13.- Con motivo de inconvenientes técnicos en la conectividad del Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero se cede la palabra a la siguiente oradora María José LUBERTINO BELTRÁN, DNI 13.735.378 en representación de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos;
- 14.- Solucionados los inconvenientes técnicos toma la palabra el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero Lionel Enrique SUÁREZ, DNI 24.193.220;
- 15.- Paula Magali SOLDI, DNI 38.706.937 en representación de CEPIS convocada para su exposición se encontraba ausente;
- 16.- Carlos Humberto SARAIVA, DNI 20.232.657 en representación del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Salta;
- 17.- Fernando Javier GRAY, DNI 21.750.585 Intendente del Municipio de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires convocado para su exposición se encontraba ausente;
- 18.- Claudio BULACIO, DNI 13.789.398 en representación de ADEERA;
- 19.- Fernando ANTOGNAZZA, DNI 14.100.696 en representación de AGEERA;
- 20.- Armando Martin LENGUITTI, DNI 11.487.050 en representación de ATEERA;
- 21.- Cristian JUÁREZ, DNI 17.744.633 en representación de AGUEERA;
- 22.- Ricardo Pablo Gabino PALLEIRO, DNI 24.125.963 en representación de FATLYF Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza;
- Previo a continuar con las exposiciones el Presidente de la audiencia da apertura del Registro de Participantes para todos aquellos que deseen inscribirse durante el transcurso de la Audiencia Pública.
- 23.- José Luis RAMÓN, DNI 16.902.710 en representación de Protectora Fuerza Política;
- A continuación interviene el presidente de la audiencia con el objeto de informar que por un inconveniente ajeno al ENRE la página no se encuentra disponible por lo que se solicitó a todos aquellos que quieren inscribirse que lo hagan enviando un correo electrónico a: institucionales@enre.gov.ar.
- 24.- Patricia Roxana RODRÍGUEZ, DNI 31.526.140 particular interesada, convocada para su exposición manifestó no poder conectarse;
- 25.- Eduardo LERNER, DNI 4.426.364 particular interesado;
- 26.- Vicente SERRA, DNI 11.400.770 particular interesado;
- 27.- Sabrina ROTH, DNI 36.825.392 particular interesada, convocada para su exposición no se encontró presente al tiempo de su exposición;
- 28.- Carlos RAMÓN MANZUE, DNI 13.594.965 particular interesado;

Siendo las 14:33 horas del día 30 de noviembre de 2022, habiéndose dado tratamiento al Orden del Día y no advirtiéndose ninguna persona que quiera manifestar su opinión respecto al tema objeto de la Audiencia Pública, la Presidencia de la misma, dispone darla por concluida. Por Secretaría, se pone a disposición el Acta labrada hasta la presente instancia la que es suscripta de conformidad por la Presidencia y por la Secretaria de la Audiencia.